

Educación de Mercado en el Chile neoliberal: instituciones de educación superior en crisis como analizador social.

Vanessa East Carrasco.

Cita:

Vanessa East Carrasco (2019). *Educación de Mercado en el Chile neoliberal: instituciones de educación superior en crisis como analizador social*. XXXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Lima.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-030/2462>



Educación de Mercado en el Chile neoliberal: instituciones de educación superior en crisis como analizador social

Vanessa East Carrasco

“El peligro es que el vacío de la desesperanza sea ocupado por el miedo. Es allí donde el poder encuentra su fuerza de dominación” (Carpintero, E)

Resumen

Pensar la crisis de instituciones de educación privada como analizador histórico social de la educación de mercado, abandono del Estado y vulnerabilización de miles de estudiantes sobre endeudados como parte de la consolidación de una educación desde y para las elites, tiene como objetivo la comprensión de crisis institucionales, procesos de desubjetivación operando en nuestras sociedades junto al desgaste afectivo-político de los colectivos, así como los posibles puntos de fuga en la micropolítica del Chile que habitamos. Nos aproximaremos al análisis de los principales hitos que marcan el desplome de sus proyectos educativos y las implicancias sociales de estos procesos en el Chile actual.

Palabras clave: endeudamiento, educación privada, educación superior.

La educación superior será considerado en este trabajo como un analizador¹ institucional, a través del cual comprender los procesos de consolidación del modelo neoliberal en Chile, durante los 30 años de postdictadura, su crisis como uno de los principales emergentes que ha movilizó a la sociedad chilena en la últimas décadas y las implicancias subjetivas en la constitución del sujeto endeudado.

Los 4 períodos ininterrumpidos de alianzas de centro izquierda que gobiernan durante los primeros 20 años de la llamada transición a la democracia entre 1990 y 2010, lo hacen bajo las lógicas de la *“justicia en la medida de lo posible”*, frase que aplicándose a las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico militar, se hace extensiva en términos del imaginario, a la justicia social. Este imaginario solo se derrumba a partir de la revuelta o rebelión originada en el pasado 18 de octubre del 2019 y es iniciada con masivas evasiones del pago del metro capitalino por parte de estudiantes secundarios, en rechazo al alza de los pasajes. *“No son 30 pesos, son 30 años”*, consigna que pone en palabras lo innumerable de la violencia de la desigualdad social y el abuso hacia los sectores precarizados y vulnerabilizados por el Estado y las



élites político-económicas del país durante la postdictadura. El “despertar” de Chile, como ha sido llamado el actual estallido social, da cuenta de un largo estado de parálisis que sin embargo tiene numerosos puntos de ruptura, entre los que podemos mencionar el reciente movimiento feminista del año 2018 que visibilizó las estructuras patriarcales de las instituciones de educación superior, siendo el acoso sexual la expresión más explícita de esa violencia. Unos años antes fueron movimientos estudiantiles con fuerza instituyente, primero el 2006 y más tarde el 2011. Este último puso al centro del debate la necesidad de una reforma a la educación superior y su consigna *Fin al lucro, gratuidad y calidad en la educación* fueron los conceptos de una ética que llevaría a este país por los caminos de una postergada justicia social.

Durante el 2011, los movimientos estudiantiles alcanzaron un amplio apoyo ciudadano, logrando incluso cambiar la agenda de los candidatos a las elecciones presidenciales. Aun cuando el movimiento cuestiona el modelo educacional en sus bases mercantiles, no consigue doblegar el interés de las élites por lo que las condiciones para una transformación más profunda no se hacen posible. En este sentido, la consolidación del modelo económico durante los años que siguieron al término de la dictadura, legitimó el sistema económico impuesto, como señala el filósofo Maurizio Lazzarato (2019), primero de manera violenta sobre los miles de muertos y desaparecidos durante la dictadura, para más tarde consolidarse “impulsando transformaciones técnicas y normativas de profundización de las desigualdades, generando condiciones políticas de las clases subalternas para organizar y decidir sobre su vida material y política” (Narbona, Páez, 2014). Se crean complejos procesos de desubjetivación que tiene como una de sus principales aristas la llamada “economía de la deuda”, del “homo endeudado”, generando una relación social acreedor-deudor, que se superpone a otras como la de usuario/a, trabajador/a o consumidor/a, en palabras del autor:

La deuda actúa a la vez como máquina de captura, de depredación o de punción sobre la sociedad en su conjunto, como un instrumento de prescripción y gestión macroeconómica y como un dispositivo de redistribución de los ingresos. Funciona asimismo, en cuanto dispositivo de producción y gobierno de las subjetividades colectivas e individuales (Lazzarato,2010).

Desde este impacto material y subjetivo, se instala el padecimiento de la inhabilidad o ilegitimidad para cambiar o transformar la realidad de los espacios microsociales, mucho menos el de las decisiones macroestructurales. Este estado de sujeción se manifiesta en desesperanza, letargo o apatía que podía interpretarse como desinterés e



individualismo, pero que tiene profundas raíces en la percepción certera de que “*no hay nada que se pueda hacer*”, “*igualmente mañana tengo que levantarme a trabajar*”. El año 2016, el contexto del colapso del transporte público, un trabajador señala: “*me siento como un vil perro apaleado que solo puede morder el trozo de palo que le tiran*”. En esta frase, la queja pone de manifiesto la impotencia frente a la sensación de enajenación de humanidad, a lo que Mendel (2000) se refería cuando hablaba de la necesidad de la apropiación del *acto poder*. No solo como registro psíquico, sino como espacio colectivo desculpabilizado, desde donde desafiar la autoridad y escapar de la división, fragmentación de la vida y la alienación del trabajo.

El endeudamiento ha sido una de las principales vías a través de las cuales grandes sectores de la población han accedido a la educación superior, sin embargo, el fenómeno podemos analizarlo como un dispositivo más amplio a través del cual opera el miedo y la sumisión. Endeudamiento y trabajo funcionan como motor del sistema neoliberal, configurando un encadenamiento que permite a las grandes empresas y trasnacionales maximizar las ganancias a costa de la sobre explotación humana y de los recursos naturales del país.

El endeudamiento, como mecanismo para sostener la vida, obliga a aceptar las condiciones del trabajo precario y de producción con profundas implicancias en términos de la construcción de una cultura y una subjetividad controlada, como señala M. Hardt (2002), pasamos desde un sistema basado en el bienestar al de uno basado en la deuda, proceso que se instala a partir de la década de los 80 en nuestras sociedades. La vida de precariedad ontológica, como señala Butler (2006), ha sido precarizada desde la servidumbre sobre la que se construye un modelo de trabajo y de endeudamiento para la subsistencia de las cuestiones fundamentales que sostienen la vida: alimentación, vivienda, salud e incluimos en este trabajo, la educación, en la medida que esta aparece como la única vía de superación de la pobreza y principal herramienta de movilidad social. La deuda, es entonces un dispositivo que produce un tipo de individualización mediante la retórica de la autosuficiencia (Hardt, xx) y la educación se proclama como un lugar utópico, un imaginario desde donde brindar mejor vida a hijos e hijas, responsabilidad que recae exclusivamente sobre las familias.

Durante los años 80, se inicia en Chile la transformación del sistema de educación superior, lo que tuvo como principal consecuencia un crecimiento acelerado en materia de cobertura. Cabe señalar que el número de estudiantes pasó de 100.000, al final de la dictadura, a un millón en la actualidad, donde el 70% de ellos son de “primera



generación”, hijos e hijas de padres y madres que no han terminado la enseñanza secundaria o que son primera generación que accede a la universidad.

Esta transformación fue producto de la creación de Universidades Privadas, la mayoría en manos de grupos económicos ligados principalmente a la derecha político-económica del país, sin embargo, para que este negocio fuera rentable, se requería buscar un mecanismo de financiamiento que permitiera a estudiantes de sectores precarizados lograr el anhelado ingreso a la educación superior. Para ello se creó el llamado Crédito con Aval del Estado el año 2006, mecanismo mediante el cual la banca privada suscribe con el estudiante un contrato de financiamiento cuyos intereses, previo al año 2013 alcanzaban un 5,8% desde el inicio de la carrera y que solo luego de las grandes movilizaciones del 2011 se logró que fueran rebajados al 2%, rebaja que a los morosos se lleva a cabo con el subsidio Estatal a la diferencia, equivalente al 3,8%.

Los estudiantes que utilizan el CAE para el financiamiento de sus estudios, pertenecen a familias de escasos recursos que no pueden obtener becas o financiamiento a través del Fondo Solidario de Crédito Universitario, disponible solo para universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, conformadas mayoritariamente por instituciones públicas de acceso mediante Prueba de Selección Universitaria (PSU), sistema que deja fuera a todos aquellos y aquellas estudiantes que no han tenido una enseñanza primaria y secundaria de calidad, mayoritariamente jóvenes de los sectores más vulnerabilizados de nuestro país. Chile es uno de los once países (entre 64 naciones) donde la situación socioeconómica de un estudiante tiene más impacto en el rendimiento escolar, según informe de la OCDE 2016. La comisión investigadora del CAE en el Senado durante el 2018 señala que los estudiantes que acceden a este crédito “son consumidores hipervulnerables porque se trata de estudiantes que no alcanzan a percibir los efectos de un crédito, sino hasta mucho tiempo después de salir de sus estudios”.

Como señala un estudio de Fundación Sol (2016) de reciente publicación, la promesa de aumentar el acceso a la educación superior se cumplió ampliamente. El año 2005, antes del CAE, la matrícula era de 663.679 estudiantes, llegando el 2017 a 1.247.746 matriculados. El 70% de este aumento se concentra en grupos educacionales: Laureate, Santo Tomás, Inacap y Pontificia Universidad Católica. Precisamente es en estas instituciones donde se concentra el 67,4% de los alumnos que acceden al CAE y 67,8% de los recursos que por esta vía ha recibido desde el año 2006 todo el sistema de Educación Superior chileno, lo que equivale a casi \$3,2 billones (millones de millones). Sólo el Grupo Laureate International, ha recibido \$836 mil millones a través del CAE.



Este grupo internacional, es reconocido públicamente por el carácter lucrativo de su actividad educacional y actualmente su matrícula sobrepasa la de los planteles de educación superior estatal.

Por otro lado, en este período, la matrícula de los establecimientos estatales sólo aumenta a 23.358 alumnos y su participación en el total se reduce a sólo 15,6%, convirtiéndose en un apéndice del sistema de Educación Superior. De este modo es posible ver cómo las políticas del Estado se han enfocado en la consolidación del modelo educativo privado, en desmedro de la educación pública. Otro estudio requeriría mayor profundidad para dar cuenta, de qué manera, estos proyectos educativos, en términos de su misión, reproducen una educación al servicio de la reproducción social, con poco espacio para proyectos enfocados en una educación crítica. Especial mención entre estas universidades, corresponde la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, proyecto nacido durante la dictadura en 1982¹ como albergue de profesores y profesoras (muchos de ellos exonerados de las instituciones públicas intervenidas) alumnos y alumnas sin otro espacio para generar un discurso académico contra institucional durante la dictadura, con vocación crítica y fuerte enfoque en la transformación social. Este proyecto, al pasar de las décadas, también fue transformándose en uno de mayor arraigo en familias de niveles socio económico bajo.

Podemos decir que la mayoría de los proyectos privados de educación que no se encuentran amenazados por la quiebra o el cierre, pertenecen a poderosos grupos económicos y religiosos que reciben un importante aporte en materia de donaciones y que cuentan con poderosas máquinas burocráticas para hacerse cargo del destino de estas instituciones. En palabras de la académica Violeta Pakova sobre el cierre de la universidad ARCIS, proyecto administrado por las izquierdas de nuestro país, que tiene entre muchos otros factores, pero que entre ellos se encuentra también la complicidad entre academia, política y mercado, y la inscripción de ésta en el formato del *capitalismo cognitivo* lo que implica nuevos códigos de orden que se manifiestan en un proceso progresivo de capitalización de la inteligencia, mercantilización de la creatividad, estandarización, jerarquización, despolitización y reglamentación del saber mediante poderosas máquinas burocráticas.

La desaparición de 4 universidades privadas que han cerrado por quiebra, entre el año 2014 y 2019, ya suma más de 20.000 estudiantes afectados, esto sin considerar una cifra negra de repercusiones en términos de las familias afectadas de manera colateral y la desvalorización del título profesional. Familias en las cuatro universidades



provenientes de grupos económicos vulnerabilizados que actualmente se encuentran endeudados, pagando millonarios intereses.

El 2015 se pone en práctica por primera vez en la historia de Chile la ley 20.800 dictada en diciembre del 2014 luego de la debacle de la Universidad del Mar, institución que llegó a ser la tercera universidad privada más grande del país y que tras su quiebra dejó en evidencia el funcionamiento lucrativo de algunas instituciones privadas de educación superior. A través de complejas redes de negocios se generaron mecanismos para evadir la ley con la creación de sociedades de propiedad de los mismos dueños de la universidad, mediante el arrendamiento de todos los inmuebles universitarios y los materiales que la componen. Esta figura creada para el lucro en la educación ponía en evidencia en el país cómo, desde la llegada a la democracia esta práctica venía desarrollándose en desmedro de la calidad educativa para el incremento de millonarias fortunas personales, bajo el silencio cómplice del Estado. Al mismo tiempo, queda al descubierto la corrupta relación entre la Comisión Nacional de Acreditación y universidades como la del Mar, a quienes les fue vendido este requisito para el traspaso de fondos del Estado, con lo cual recibieron millones de pesos provenientes de los CAE. Como señala la periodista Mónica González, “*se crearon Universidades paupérrimas para pobres*” (2014), donde la precariedad de la fiscalización permitió la corrupción y la existencia de universidades fachadas para generar lucro a costa de la calidad de la educación a estudiantes provenientes de niveles socioeconómicos medios y medios-bajos.

Según la CASEN, el 40% de los dos quintiles más pobres del país asisten a centros de formación técnica e institutos profesionales, mientras que 31% asiste a universidades fuera del CRUCH y solo un 29% a universidades del CRUCH).

Según la CASEN, el 40% de los dos quintiles más pobres del país asisten a centros de formación técnica e institutos profesionales, mientras que 31% asiste a universidades fuera del CRUCH y solo un 29% a universidades del CRUCH). Nos encontramos con una de las grandes paradojas de una universidad privada con vocación pública como se auto declaraba. ¿Cómo democratizar la educación superior en una universidad privada cuyo proyecto de autonomía debe ser tranzado una y otra vez para sostener materialmente su existencia? ¿cómo hacerse cargo de estudiantes precarizados sin generar los mecanismos académico-administrativos que pudieran acogerlos?

En nuestro país La ley de aseguramiento a la calidad de la educación omitió expresamente el concepto de universidad. Roxana Pey al respecto señala: “más allá del



lucro, de las estafas, los cartones que valen o no valen, la universidad no es solamente una escuela de fabricar profesionales; es más que eso, es un lugar donde se cultiva algo, donde se conversa, donde se piensa...” (Mönckeberg, 2013: 551). La tarea primaria, ha sido descuidada en la medida que la desorganización institucional y las amenazas generadas por los conflictos de las universidades en proceso de cierre. Bleger (1970) se interroga cómo las instituciones de salud mental terminan desviándose del objetivo fundamental de su tarea, la de cuidar. Para el caso de instituciones de educación, refiere a desviaciones desde el formar al deformar.

¿Qué significa ser o hacer universidad, educar en un contexto de crisis institucional?

En nuestro país La ley de aseguramiento a la calidad de la educación omitió expresamente el concepto de universidad. Roxana Pey al respecto señala: “más allá del lucro, de las estafas, los cartones que valen o no valen, la universidad no es solamente una escuela de fabricar profesionales; es más que eso, es un lugar donde se cultiva algo, donde se conversa, donde se piensa...” (Mönckeberg, 2013: 551). La tarea primaria, como señalábamos anteriormente ha sido descuidada en favor de la sobrevivencia desesperada. Bleger (1970) se interroga cómo las instituciones de salud mental terminan desviándose del objetivo fundamental de su tarea, la de cuidar, podemos decir lo mismo de la Educación y las desviaciones desde el formar al deformar. En una crisis como la desatada desde el 2014 a la fecha, se hace urgente pensar en términos del sufrimiento psíquico de las comunidades educativas, desde docentes a estudiantes y por tanto no solo en la necesidad de formar, sino también cuidar.

Al cierre de estas universidades, lo que nos encontramos hoy son miles de estudiantes endeudados, muchos de ellos morosos, pagando intereses abusivos. La deuda con los estudiantes fragilizados desde sus historias de vida, procedencia social, nuevamente vulnerabilizados por las instituciones universitarias que escogieron para dar curso a sus sueños y que prometieron cambiar sus vidas, no puede valorizarse.

Notas

¹ Nace en 1982 como el Instituto ARCOS y solo en los 90 se convierte en Universidad ARCIS.



Bibliografía

Butler, Judith (2006), *Vidas precarias. El poder del duelo y la violencia*, Buenos Aires: Paidós.

Banco Mundial (2011). Programa de Crédito con Aval del Estado (CAE) de Chile. Análisis y evaluación. Recuperado de <http://ciperchile.cl/wpcontent/uploads/Informe-Programa-de-Cr%C3%A9dito-con-Aval-del-Estadoversi%C3%B3n-espanol-2019-10-11.pdf>

Guzmán, J. A., Gonzalez, M., Figueroa, J. P., & Riquelme, G. (2014). *La gran estafa: cómo opera el lucro en la educación superior*. Editorial Catalonia.

Kremerman, M., & Paez, A. (2016). *Endeudar para gobernar y mercantilizar. El caso del CAE* [Indebting to governing. The case of CAE]. Santiago: Fundacion Sol.

Lazzarato, M. (2013). *La fábrica del hombre endeudado: Ensayo sobre la condición neoliberal*. (H. Pons, Trad.). Buenos Aires: Amorrortu.

Mendel, Gerard (2000) *La Escuela es una Sociedad, aunque no lo sepa todavía*. Conferencia dictada en el cierre del Congreso Internacional de Educación de 2000. Revista IICE. Dossier. Facultad de Filosofía y Letras. UBA Bs As: 15-24.